

© DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, 1992  
Inscripción N° 84.438  
ISBN: 956-244-012-5

Derechos exclusivos reservados para todos los países

(Autora: *Verónica Valdivia Ortiz de Zárate*)

Se terminó de imprimir esta 1ª edición  
en los talleres gráficos de la Editorial Universitaria  
San Francisco 454, Santiago de Chile  
en el mes de diciembre de 1992

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

# LA MILICIA REPUBLICANA LOS CIVILES EN ARMAS 1932 - 1936

*Verónica Valdivia Ortiz de Zárate*



DIRECCIÓN  
DE BIBLIOTECAS  
ARCHIVOS  
Y MUSEOS

CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO BARROS ARANA

© DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, 1992  
Inscripción N° 84.438  
ISBN: 956-244-012-5

Derechos exclusivos reservados para todos los países

(Autora: *Verónica Valdivia Ortiz de Zárate*)

Se terminó de imprimir esta 1ª edición  
en los talleres gráficos de la Editorial Universitaria  
San Francisco 454, Santiago de Chile  
en el mes de diciembre de 1992

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

# LA MILICIA REPUBLICANA LOS CIVILES EN ARMAS 1932 - 1936

*Verónica Valdivia Ortiz de Zárate*



DIRECCIÓN  
DE BIBLIOTECAS  
ARCHIVOS  
Y MUSEOS

CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO BARROS ARANA

## ÍNDICE

Introducción	11
Capítulo I UNA GUARDIA CÍVICA CONTRA "LOS AUDACES"	21
Capítulo II UN EJÉRCITO CIVIL PARA LA REVITALIZACIÓN NACIONAL	35
Capítulo III AQUELLOS HOMBRES "ESPERANZAS DEL MAÑANA"	51
Capítulo IV LA MILICIA REPUBLICANA Y "SU EXCELENCIA"	61
Capítulo V ¿FUERZAS ARMADAS VERSUS MILICIA REPUBLICANA?	83
Capítulo VI EL OCASO DEL CIVILISMO	99
Epílogo	113
Anexo	121
Abreviaturas	125
Fuentes y Bibliografía	127

## INTRODUCCIÓN

La existencia de cuerpos armados profesionales ha sido uno de los factores que ha puesto en la discusión el problema del uso institucional de la violencia. El Estado moderno implica el uso "legítimo de la fuerza" por parte de aquellos organismos a los que institucionalmente corresponde la mantención del orden, de la seguridad interna y la defensa de la soberanía externa. Tales son los institutos armados y las fuerzas policiales de orden<sup>1</sup>. Esta función es ejercida exclusivamente por dichas entidades, toda vez que son las únicas a las que la ley reconoce tal atributo.

Los regímenes democráticos suponen que el Estado controla y maneja la fuerza, puesto que los institutos castrenses deben estar bajo el mando civil. Si bien este equilibrio cívico-militar no es difícil de mantener en países políticamente estables y con tradición democrática, éste se vuelve mucho más precario durante un proceso de redemocratización<sup>2</sup>.

Durante los años veinte y parte de los treinta en Chile, los militares se convirtieron en protagonistas de la historia nacional al abandonar institucionalmente los principios de no deliberación y no intervención política. Ellos estuvieron detrás o en el gobierno entre 1924 y 1932. Entre estos años se transformaron en alternativa política, extendiendo sus funciones más allá de sus marcos corporativos y profesionales. El costo de tal transgresión tuvo como resultado el que estos organismos se vieran involucrados en dos experiencias políticas y castrenses que dejaron profundas huellas en la historia de Chile, tanto en el corto como en el largo plazo. Por una parte, el experimento de Carlos Ibáñez con un proyecto nacional de un "Chile Nuevo", que reunió las simpatías de varios sectores sociales y cuyo fracaso dejó muchos resquemores, desestabilizó las relaciones de orden civil y militar. Por otra parte, una propuesta socialista que dividió internamente la institución, radicalizándola y agudizando un problema social que ya era grave para 1932. La República Socialista de Eugenio Matte, Marmaduke Grove y Carlos Dávila colocó a las fuerzas armadas en una posición de debilidad frente al mundo civil, abriendo camino a la redemocratización. Este proceso implicaba retomar el control sobre las fuerzas armadas y sobre las fuerzas sociales que se le habían unido en ese experimento.

El punto central a definir en 1932 era cómo lograr ese dominio. Si los organismos a quienes legítimamente estaba reservado el uso de la violencia ya no contaban con la confianza de la mayor parte de la sociedad, la resolución del

<sup>1</sup> Alfred Stepan, *Repensando a los militares en política*, pág. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, pág. 8.



conflicto implicaba su anulación —al menos temporal— del monopolio en el uso de la fuerza. En ese sentido es que se produjo el fenómeno de militarismo civil.

El problema de la militarización de la política habitualmente ha sido asociado a la intervención de los militares en actividades ajenas a su profesión. Este proceso implicaría una desviación “del recto sentido de lo militar” y la irrupción castrense en ámbitos propiamente civiles<sup>3</sup>. Sin embargo, el militarismo no es exclusivo de ellos, sino que también afecta a sectores sociales no uniformados. En otras palabras, existe también un militarismo civil. En éste, los civiles involucrados ven en el modelo de disciplina y organización de las fuerzas armadas, un cúmulo de valores que pueden y deben —en algunos casos— ser imitados y generalizados al resto de la sociedad, como una manera de enfrentar el temor, la inseguridad y el cambio<sup>4</sup>. Por ello, el militarismo civil normalmente aparece en épocas de crisis.

La Milicia Republicana es un buen ejemplo de este fenómeno, toda vez que fueron los civiles los que espontáneamente decidieron enfrentar a las fuerzas armadas en sus mismos términos.

En la decisión de romper el monopolio de la fuerza, sin embargo, intervino no sólo la convicción de los civiles de tomar las armas, sino que también la de las autoridades legales, que sucedieron al régimen militar, especialmente la de Arturo Alessandri Palma, elegido presidente de la República en diciembre de 1932. En este contexto, la existencia de esta milicia armada bajo un régimen civil se enmarca dentro de un período de redemocratización.

La transición política, entendida como el paso de una dictadura militar a un régimen civil, comenzó en la coyuntura de los treinta cuando Carlos Dávila fue derrocado, dando por finalizada la República Socialista chilena en septiembre de 1932<sup>5</sup>. A partir de ese momento, tanto la sociedad civil como las fuerzas armadas estuvieron en condiciones de comenzar la transferencia del poder<sup>6</sup>. La desintegración que afectaba internamente a los institutos armados y el fortalecimiento y autonomía que alcanzaron algunas instancias civiles —reconstitución de la arena política— permitieron el proceso transicional. Desde el punto de vista de la recuperación del régimen civil, el principal efecto de la República Socialista fue, en última instancia, definir y consolidar el cambio en las relaciones de poder entre las fuerzas armadas —dueñas de las armas— y los civiles. Este contrapeso fue posible porque la República Socialista había sido capaz de generar un consenso mayoritario al interior de la sociedad chilena, en el sentido de devolver las fuerzas armadas a sus cuarteles, debilitando la decisión militar de mantenerse en el gobierno. Dado que el monopolio del uso de la fuerza es un requisito de los Estados democráticos modernos, el nuevo gobierno civil de Alessandri debía

<sup>3</sup> Genaro Arriagada, *El pensamiento político de los militares*, pág. 54.

<sup>4</sup> *Ibid.*, pág. 59.

<sup>5</sup> Augusto Varas, *Fuerzas armadas y transición a la democracia en América del Sur*, FLACSO, documento N° 91, pág. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pág. 1.

controlar a las fuerzas armadas atacando precisamente ese baluarte que las fortalecía. En otras palabras, debía no sólo aprobar sino además respaldar la decisión de los “civiles en armas”.

En este sentido, el presente estudio pretende ahondar en el caso específico de la Milicia Republicana, que tiene el mérito de reunir en sí dos temas centrales en la discusión sobre la consolidación de los regímenes democráticos en América Latina. Por una parte, el problema de la estrategia a seguir con respecto a los militares, vale decir, la política militar implementada desde el gobierno. Por otra, la respuesta civil autónoma en relación al carácter que asume el uso monopólico de la fuerza. La Milicia Republicana objetó esto último, elaborando una respuesta propia frente a las fuerzas armadas y coadyuvó al diseño de la estrategia elaborada por el Presidente.

El estudio de este tipo de temas ha sido abordado tanto por historiadores como por sociólogos. Estos han analizado el pensamiento militar, sus intervenciones en política, los mecanismos institucionales usados para restringir sus actividades, como también el proceso de reinserción en la vida civil que desarrollaron a partir de los años cuarenta<sup>7</sup>. De la misma forma se han realizado trabajos respecto al tema de transición política, especialmente en un marco comparativo<sup>8</sup>.

Sin embargo, estos análisis han descuidado la relación de las fuerzas armadas con otros elementos de la sociedad. Desde esa perspectiva, en 1988 Carlos Maldonado Prieto hizo un primer intento de analizar un caso específico de respuesta civil frente a las fuerzas armadas y el movimiento popular, a través de su estudio sobre la Milicia Republicana<sup>9</sup>. En él expone tanto el nacimiento como la organización y pensamiento de dicha agrupación, evaluándola como un caso de “militarismo burgués”.

Ampliar el marco de análisis de las relaciones cívicas y militares, y el problema de la consolidación de las instituciones democráticas son las tareas que el presente trabajo se propone.

La opción civil por la militarización estuvo relacionada con algunas de las transformaciones sociales y económicas ocurridas desde fines del siglo XIX: el nacimiento de un movimiento popular confrontador del orden oligárquico y la profesionalización y transformación de las fuerzas armadas. Al producirse el colapso de dicho orden, estos procesos, que aparentemente no tenían vincula-

<sup>7</sup> Hugo Frühling, Carlos Portales y Augusto Varas, *Estado y fuerzas armadas*; Alain Foxe, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*; Frederick Nunn, *Chilean Politics 1920-1931: The Honorable Mission of Armed Forces*; F. Nunn, *The Military in Chilean History. Essays on Civil-Military Relations, 1810-1973*; Patricio Quiroga y Carlos Maldonado, *El prusianismo en las fuerzas armadas chilenas*; Augusto Varas y Felipe Agüero, *El desarrollo doctrinario de las fuerzas armadas*; Augusto Varas, Felipe Agüero y Fernando Bustamante, *Chile, democracia, fuerzas armadas*.

<sup>8</sup> Aquí debemos mencionar nuevamente a Augusto Varas, Manuel Antonio Garretón y los trabajos del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.

<sup>9</sup> Carlos Maldonado, *La milicia republicana 1932-1936. Historia de un ejército civil en Chile*.



ción alguna, terminaron por entrelazarse apareciendo el conflicto social como amparado y estimulado por las fuerzas armadas. El resultado fue el esbozo de una corriente que rechazaba el carácter que asumía el movimiento popular, de rasgos nacionalistas, que creía en la violencia como arma política y que se cristalizó en el surgimiento de grupos paramilitares.

Este tipo de organizaciones tuvo dos orígenes: por una parte, aquellos que nacieron como reacción al movimiento popular y, por otra, los que se opusieron a la participación política de las fuerzas armadas. Un ejemplo de esta primera causa fueron las Ligas Patrióticas de Tarapacá y Antofagasta, aparecidas en 1911, que tuvieron una orientación fundamentalmente nacionalista y racista en un comienzo, realizando fuertes ataques a los residentes peruanos y bolivianos de esas provincias. No obstante, con el crecimiento del movimiento popular fueron adoptando una tendencia antisocialista, de oposición a las organizaciones obreras y a los postulados reformistas de la Alianza Liberal. Tal como el Presidente de las Ligas Patrióticas de Antofagasta sostenía en 1919, era necesario "volver a los antiguos valores y a la época en que en el Chile viejo se imponían el talento, el carácter, la honradez y el trabajo"<sup>10</sup>.

Para estas Ligas los sindicatos y las tendencias democráticas liberales expresadas por la Alianza Liberal eran nutridas por el "corruptor oro peruano"<sup>11</sup>. En suma, las Ligas Patrióticas mezclaron un nacionalismo de tipo racista con una tendencia al tradicionalismo. De acuerdo con ello, se extendieron a otras regiones del país y combatieron violentamente la candidatura de Arturo Alessandri en 1920.

La segunda vertiente estuvo vinculada al movimiento militar de enero de 1925.

Hacia 1920, Chile ya contaba con fuerzas armadas modernas tras el proceso de profesionalización a que fueron sometidas desde fines del siglo anterior. Dicho desarrollo implicó no sólo un mejoramiento de su capacidad propiamente militar, sino también el delineamiento de una cosmovisión castrense con ideas muy claras respecto del movimiento popular, el orden interno y el progreso. La incapacidad del orden oligárquico y parlamentario para dar una adecuada respuesta a cada uno de estos problemas, fue desarrollando entre los oficiales un sentido de escepticismo hacia el modelo democrático y liberal. Esto, unido a su propia perspectiva, preparó el camino para su irrupción en la arena política a mediados de la década<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Hernán Ramírez Necochea, *El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970*, Araucaria de Chile, Madrid 1978, págs. 11-13.

<sup>11</sup> *Ibid.*, pág. 13.

<sup>12</sup> Arriagada, *op. cit.*, págs. 81-101; Juan Pablo Bennett, *La revolución del 5 de septiembre de 1924*; Arturo Ahumada, *El ejército y la revolución del 5 de septiembre de 1924*; Hugh Bicheno, *Antiparliamentary Themes in Chilean History: 1920-1970, Government and Opposition*, VII, 3, 1972, pág. 350; Carlos Charlín, *Del avión rojo a la República Socialista*; Alain Joxe, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*; Frederick Nunn, *El profesionalismo militar chileno en el siglo XX: pensamiento y autopercepción de la clase de*

La desviación de los objetivos que movilizaron a los oficiales jóvenes en septiembre de 1924, produjo el quiebre de la disciplina y jerarquía militar cuando Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove encabezaron el golpe del 23 de enero de 1925, que, en definitiva, polarizó las posiciones y provocó el surgimiento de grupos paramilitares.

La Unión Nacional rechazó el movimiento de la oficialidad joven al que calificó de "cuartelazo", acción de caudillos con aspiraciones inconfesadas. A juicio de este sector político, los militares habían traicionado los objetivos de restauración del orden constitucional que perseguían las fuerzas armadas en septiembre de 1924. La solución, desde su punto de vista, era "la lucha contra el ejército de otra institución armada con el propósito de reorganizar la defensa nacional con hombres más aptos y desinteresados... sólo queda pues, la unión civil ante el común obstáculo para el libre desenvolvimiento nacional"<sup>13</sup>. Siguiendo esta línea de pensamiento, los unionistas crearon guardias civiles adiestradas secretamente en los alrededores de Santiago, con armas y municiones compradas en Argentina.

Por su parte, la Alianza Liberal también creó una guardia civil para apoyar la línea reformista de la oficialidad joven que proponía el regreso de Alessandri. La Guardia Republicana, organizada por el italiano Balilla Venturelli y el Partido Radical, planteó por primera vez esa extraña mezcla de militarismo y civilismo que habría de caracterizar a las guardias civiles del tipo de la Milicia Republicana. Efectivamente, la Guardia Republicana sólo apoyó la gestión militar de 1925 para asegurar la reposición del gobierno civil constitucionalmente elegido, lo que implicaba mantener controlado al ejército. Por ello, "era indispensable militarizar nuestra Guardia Republicana, incrementarla y armarla a toda costa"<sup>14</sup>. Es decir, la fuerza apareció como el elemento central en la recomposición del orden institucional.

Las armas supuestamente les fueron otorgadas por el gobierno y, según acusaciones de la Unión Nacional, la Guardia las distribuyó entre los sectores populares que ingresaron a ellas. Esto llevó a que el ejército apareciera vinculado a grupos "impregnados de las doctrinas... del más avanzado anarquismo", provocando una fuerte sensación de temor entre los sectores altos y algunas capas medias<sup>15</sup>. Este primer experimento armado, sin embargo, se disolvió rápidamente,

*oficiales hasta 1973*, pág. 16; F. Nunn, *Military in Chile: The Revolutions of September 5, 1924 and January 23, 1925*; F. Nunn, *Emil Körner and the Prussianization of the Chilean Army: Origins, Process and Consequences, 1895-1920*; Patricio Quiroga y Carlos Maldonado, *op. cit.*, págs. 35-80; Emilio Rodríguez Mendoza, *El golpe de estado de 1924*; Carlos Sáez, *Recuerdos de un soldado* Vol. 1; Augusto Varas, F. Agüero y Fdo. Bustamante, *op. cit.*, págs. 29-41.

<sup>13</sup> *El Diario Ilustrado*, 1, 2, 1925, pág. 3, las palabras pertenecen al unionista Emilio Tizzoni.

<sup>14</sup> Carlos Vicuña Fuentes, *La tiranía en Chile*, pág. 14.

<sup>15</sup> En un mitin celebrado el 11 de febrero de ese año, Juan Pradenas Muñoz, del Partido Democrático, afirmó que la Guardia Republicana efectivamente poseía armas y que el gobierno la proporcionaría a quienes todavía no tenían. *La voz de la verdad*, 14, 2, 1925, pág. 1.



ya que el regreso de Alessandri satisfizo el más importante de sus objetivos. Cuando el Presidente salió del gobierno nuevamente ese año, el intento de reorganizarla no tuvo éxito.

El fracaso de la gestión de Alessandri por segunda vez, creó desconfianza entre los propios civiles respecto de su capacidad para manejar los problemas nacionales, mientras la posición de los militares se fortalecía. La opción militarista representada por Carlos Ibáñez adquirió cada vez mayor fuerza, cuando el líder del ejército pasó a encarnar todos los afanes de cambio que estremecían a la sociedad chilena<sup>16</sup>.

El proyecto modernizador de Ibáñez, no obstante, no tuvo los resultados esperados, a pesar de las reformas implementadas en materia política, económica y social. En el terreno económico, especialmente, el país siguió dependiendo excesivamente del sector externo, lo que acentuó los efectos de la crisis de 1929. La incapacidad de Ibáñez de manejar esta situación determinó su salida del gobierno, al permitir la emergencia de corrientes opuestas a su régimen que no habían podido manifestarse abiertamente mientras mantuvo firmes las riendas del poder.

La derrota política de esta alternativa militarista puso nuevamente en el centro de la discusión la necesidad de recobrar el orden civil. Por eso, el período que se inició con la caída de Ibáñez y que se extendió hasta la llegada del primer gobierno socialista en junio de 1932, puede ser caracterizado de legalista y violentista al mismo tiempo: una fe mayoritaria en el sistema democrático, pero combinada con una fuerte convicción en el uso de la fuerza, si era necesario, para alcanzar dicho orden.

Esta mezcla pudo apreciarse intensamente ya en los últimos días del gobierno ibañista, cuando los estudiantes se levantaron violentamente contra éste. La salida del ministro del Interior, Juan E. Montero, que había logrado dar una imagen legal a la gestión militar, abrió las compuertas, largamente cerradas, para que la oposición se manifestara ampliamente. En ese contexto, el mes de julio de 1931 concentró las jornadas de la lucha por la libertad, del retorno a las normas constitucionales y por el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles. Esta respuesta civil se materializó en un primer momento en acciones inorgánicas e inconexas. Los estudiantes, fundamentalmente, respondían a la violencia de los carabineros con igual actitud, por lo que se suscitaron tiroteos en distintos puntos de la ciudad con un saldo de civiles y militares heridos. Esta decisión de jugarse "el todo por el todo" cobró su primera víctima en el estudiante de medicina Jaime Pinto Riesco, un acérrimo y activo antiibañista, que se enfrentó con los carabi-

<sup>16</sup> Crescente Donoso Letelier, *Notas sobre el origen, acatamiento y desgaste del régimen presidencial, 1925-1973*, Historia, N° 13; Raúl Atria, *Tensiones políticas y crisis económica: el caso chileno 1920-1938*, en *Estudios sociales*, 1, 1973, pág. 45; René Montero, *Confesiones políticas*, pág. 43; F. Nunn, *Chilean Politics...* págs. 107-124; Frederick Pike, *Chilean and the United State 1880-1962*, págs. 189-191; Hernán Ramírez, *Origen y formación del Partido Comunista*, págs. 160-161.

neros extrayendo su revólver y disparando "varias veces contra el teniente, sin dar en el blanco. Un carabinero hizo uso de su arma, impactando a quemarropa a Jaime... falleció casi al instante"<sup>17</sup>. Su muerte precipitó el apoyo del gremio médico que se sumó a la huelga llamada por los universitarios, y a la que más tarde se agregarían abogados e ingenieros fortaleciendo el movimiento de resistencia a Ibáñez.

El éxito de la movilización hizo que esta reacción espontánea y en cierta medida, desordenada, fuera estructurada a través de la formación de guardias cívicas, amparadas por las nuevas autoridades. La Guardia Cívica de Santiago, al igual que las creadas en Valparaíso y Concepción ejerció funciones de orden y tránsito. La Legión Cívica de Valdivia adquirió características especiales, distintas que el resto, al organizarse sobre la base de grupos de cinco bajo el mando de un jefe de fila encargado de buscar "hombres jóvenes, leales, discretos y dispuestos a presentar un solemne juramento de fidelidad a la causa civil"<sup>18</sup>.

En suma, todas estas guardias tuvieron un carácter netamente civilista, sin otro enemigo que la participación militar en actividades ajenas a su profesión.

Los tensos meses que sucedieron a la instalación del gobierno civil de Manuel Trucco se caracterizaron por agudizar el conflicto social y la crisis económica. Ambos problemas tuvieron el efecto de fortalecer esta primigenia tendencia a la militarización de la población civil, cuando el gobierno decidió aminorar su déficit económico rebajando los sueldos a las fuerzas armadas. Esta decisión del entonces ministro de Hacienda, Pedro Blanquier, fue percibida por las instituciones castrenses —en todos sus escalafones— como una represalia de los civiles por lo sucedido en los años anteriores. La desazón militar llevó a que la disciplina y la verticalidad del mando se quebrantaran y se produjera el levantamiento de la marinería en la madrugada del 1 de septiembre de 1931<sup>19</sup>.

El tinte que adquirió la sublevación provocó un importante cambio en el carácter de las guardias cívicas, cuando al sentimiento antimilitarista que las motivaba se sumó un fuerte espíritu anticomunista. El respaldo de miembros del Partido Comunista y de la Federación de Obreros de Chile a los amotinados, dio al levantamiento un carácter revolucionario, puesto que el comunismo se vio, aparentemente, asociado a las fuerzas armadas<sup>20</sup>. Los sectores medios —fundamentalmente profesionales, comerciantes, estudiantes y empresarios— rechazaron la acción de la marinería y apoyaron la decisión gubernamental de aplacarlos

<sup>17</sup> Waldo Brünning, *Los médicos principales actores en el derrocamiento del general Ibáñez en 1931*, en *Vida Médica*, pág. 8.

<sup>18</sup> *El Diario Ilustrado*, 28,7,1931, pág. 4; *La Unión* (Valparaíso) 27,7,1931, págs. 16 y 30; 7,1931, pág. 7; *El Sur* (Concepción) 27,7,1931, pág. 7; *La República* (Valdivia) 17,8,1931, pág. 3 y 24,8,1931, pág. 7.

<sup>19</sup> Carlos Sáez, *op. cit.*, págs. 36-37, Vol. 3; Carlos Charlín, *op. cit.*, págs. 409-410.

<sup>20</sup> Ricardo Donoso, *Alessandri, agitador y demoleedor*, págs. 62-64, Vol. 2; F. Nunn, *The Military...* pág. 200.



con las fuerzas leales. Mientras, los civiles también se organizaban para enfrentar una posible extensión del movimiento resucitando las guardias cívicas de julio.

Las guardias volvieron a aparecer tanto en Santiago como en provincias, cumpliendo funciones de patrullaje, control del orden público y también una nueva función de protección a la propiedad privada. El rasgo que las distinguió de sus antecesoras fue su instrucción, que en esta oportunidad fue impartida por el ejército o los carabineros.

En la provincia de Aconcagua, los comerciantes organizaron guardias cívicas para la defensa de sus negocios y propiedades. Al conocerse la noticia que el levantamiento había sido sofocado, la guardia "perfectamente militarizada" juró fidelidad a la Constitución, a las leyes y cooperación a las tropas del ejército, carabineros y aviación, por lo que comenzó a recibir instrucción en los cuarteles<sup>21</sup>. Igualmente, en Talcahuano, 300 hombres reconocieron cuartel en el regimiento Chacabuco, bajo las órdenes del coronel (R) Osvaldo Varas, realizando servicios de patrullaje. En Arauco, los civiles respondieron al llamado de los carabineros para completar su preparación militar "en marchas, giros, conocimiento de armas y técnicas de disparo"<sup>22</sup>.

Esta fusión cívica y militar puso en evidencia la rápida institucionalización de la respuesta civil espontánea inicial. Tal como *El Mercurio* observaba, las guardias carecían de verdadera técnica y experiencia militar, por lo que resultaban ser fuerzas improvisadas: "En la combinación de ambas fuerzas —afirmaba el articulista— está la verdadera solución al problema del orden público"<sup>23</sup>. Por ello, se disolvieron, por orden oficial, todas las guardias cívicas, organizándose formalmente la Guardia de Reserva del Orden, legión civil preparada para cooperar con los carabineros. En último término, la creación de esta guardia fue una muestra concreta de la dependencia que la civilidad en armas tenía de las fuerzas institucionales. Su objetivo era "construir reservas voluntarias en caso de que sean necesarios sus servicios en el mantenimiento del orden... su acción sólo podrá reducirse a requerimiento de la autoridad e incorporándose a las unidades del ejército, a comisarías que los tengan en sus registros"<sup>24</sup>. De este modo la autoridad controlaba a la civilidad armada, pero al mismo tiempo, tenía una fuerza para oponer a los institutos armados si éstos se rebelaban. En otras palabras, se atacaban los dos principales problemas de ese momento, el militarismo y el movimiento popular por intermedio de esa fusión cívica y militar que era la Guardia de Reserva del Orden bajo la dirección del gobierno.

No obstante, el conflicto social no podía ser solucionado si previamente no se lograba dominar los efectos de la crisis económica. A pesar de las medidas puestas en práctica por el electo presidente Montero, para paliar la cesantía y el

<sup>21</sup> *El Diario Ilustrado*, 3, 9, 1931, pág. 1; *El Mercurio* (Valparaíso) 8, 9, 1931, pág. 5.

<sup>22</sup> *El Sur* (Concepción), 6, 9, 1931, pág. 9 y 11, 9, 1931, pág. 9.

<sup>23</sup> *El Mercurio*, 6, 9, 1931, pág. 9.

<sup>24</sup> Archivo del Ministerio del Interior (AMI), 1932. Of. Conf. documento N° 267 s/f.

hambre, la desesperación de los trabajadores estalló con violencia a fines de diciembre de 1931. La noche de navidad un grupo de civiles, sindicados de comunistas, asaltó el cuartel del Batallón Esmeralda de Copiapó, logrando apoderarse del cuerpo de guardia<sup>25</sup>. La percepción de las autoridades y de las clases medias y altas fue que el ataque era el comienzo de un levantamiento comunista general en el país, por lo que la respuesta asumió nuevamente la forma de grupos armados como fuerzas de cooperación.

La Guardia Cívica de Copiapó, organizada en los meses anteriores, se puso a disposición de los carabineros para "tomar armas e ir en defensa de la ciudad amenazada"<sup>26</sup>. Del mismo modo, en Vallenar, los acontecimientos daban lugar a una estrecha colaboración entre las fuerzas de orden, representadas por los carabineros y la guardia cívica del pueblo. Las más destacadas personalidades de Vallenar solicitaron al Presidente de la República un reconocimiento a la labor desarrollada por ambos grupos armados: "salvación débese a heroico ataque fuerza pública, secundado valientemente guardia cívica armada, carabinas, pistolas y revólveres"<sup>27</sup>. Las fuerzas de los carabineros auxiliadas por las guardias cívicas atacaron centros comunistas de la ciudad, obligándolos a rendirse después de ocasionarles considerables bajas<sup>28</sup>. De esta forma, la lucha de la civilidad iniciada en julio acentuó su clara tendencia anticomunista, desviándose de su sentido primitivo.

El impacto del alzamiento fue tan grande, que en enero de 1932 la Guardia Cívica de Copiapó se organizó formalmente. Ella velaría por el respeto a la Constitución y las leyes, protegería la propiedad, el orden público y desarrollaría el espíritu de civismo<sup>29</sup>. En este sentido, la lucha por la legalidad empezaba a transformarse, se convertía en una fuerza de cambio, en una fuerza nacionalista. Dicha tendencia seguiría madurando durante los conflictivos meses del gobierno de Montero, terminando de fortalecerse con la experiencia socialista de ese año. La fragilidad de las bases de apoyo de Montero y su imposibilidad para manejar la caótica situación del momento, llevó a los dirigentes del incipiente socialismo chileno y al ejército a unirse para derrocar al Presidente y anunciar la instalación de la República Socialista chilena.

<sup>25</sup> Osvaldo Quijada Cerda, *La pascua trágica de Copiapó y Vallenar*. Según los datos del doctor Quijada, la cifra de muertos alcanzada por la represión fue de aproximadamente treinta. Ver también Andrew Barnard, *El Partido Comunista de Chile y las políticas del Tercer Período (1931-1934)*, pág. 124 en *Nueva Historia*, 8, 1983.

<sup>26</sup> *El Atacameño* (Copiapó), 28, 12, 1931, pág. 1.

<sup>27</sup> *El Eco del Huasco*, 2, 1, 1932, pág. 2.

<sup>28</sup> *El Atacameño*, 26, 12, 1931, pág. 2.

<sup>29</sup> La Guardia permitía el ingreso a cualquier persona que concordara con sus principios, que fuera mayor de 16 años e incluso menores si el caso lo ameritaba. Para el desarrollo de su labor, esta Guardia Cívica de Copiapó recibió armamento facilitado por el regimiento Esmeralda, en diciembre del año anterior. En febrero de 1932 el comando del batallón ordenó su disolución, pero el Intendente de Atacama solicitó a Marcial Mora, ministro del Interior, que dicho armamento fuera retenido por la Guardia, para casos de emergencia. Ver *El Atacameño*, 2, 1, 1932, pág. 1 y AMI, 1932, Of. Conf. Of. N° 9, 9, 2, 1932, s/f.



Este primer experimento socialista fue el catalizador que el proceso de militarización necesitaba para consolidarse. Tanto las medidas adoptadas por el gobierno socialista como la movilización de las clases populares, hicieron aparecer al nuevo gobierno como la máxima descomposición política y social. Las críticas surgieron desde sectores como los industriales, terratenientes y profesionales, que culparon a las fuerzas armadas por la existencia de la República Socialista, asociándolas a todas las facetas del socialismo y del marxismo. De esta forma, la República Socialista sintetizó los dos principales problemas que aquejaban a Chile desde principios de siglo: un movimiento popular desestabilizador y fuerzas armadas radicalizadas. Frente a dicha realidad social sólo cabía "la unión civil ante el común obstáculo", como había propuesto siete años antes el joven unionista Emilio Tizzoni.